SEGUNDO: Concluido dicho plazo, no se ha presentado alegación alguna por el expedientado por lo que, de conformidad con el artículo 13.2 del R.D. 1.398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, la iniciación del expediente es considerada propuesta de resolución.

En uso de las facultades atribuidas por la normativa vigente, y visto el artículo 10 del Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993), en concordancia con el artículo 127.1.I) de la LBRL, Ley 7/1985 de 2 de abril, el concejal delegado resuelve:

Sancionar a don Pablo Esteban Losada, con multa de 601,02 euros, como responsable de una infracción administrativa tipificada en el artículo 34.3.b) de la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, por el abandono de un vehículo marca Peugeot LC, matrícula C-8323 -K, retirado de la calle General Dávila, 64 por infracción de tráfico. La multa deberá hacerse efectiva en la oficina que Caja Cantabria tiene abierta en la Casa Consistorial sita en la Plaza del Generalísimo s/n previa recogida de la carta de pago en el Negociado de Rentas.

Los plazos para realizar el pago de las deudas de notificaciones recibidas entre los días 1 y 15 del mes, ambos inclusive, hasta el día 20 del mes siguiente.

Las de las recibidas entre el día 16 y el último día del mes, ambos inclusive, hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Si, vencidos los plazos indicados anteriormente, no se hubiera satisfecho la deuda, se exigirá en vía de apremio de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación. De no ser resuelto éste de forma expresa dentro del mes siguiente de su presentación, dispondrá de un nuevo plazo de seis meses para interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción.

En caso de no interponerse recurso de reposición, podrá impugnar la presente resolución directamente ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación.

Santander, 7 de julio de 2005.-El alcalde (ilegible).

05/9728

4.3 OTROS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Notificación de resolución de recurso de alzada en el expediente sancionador número 124/04.

No habiéndose podido notificar al interesado a través del Servicio de Correos la Resolución del Recurso de Alzada correspondiente al expediente sancionador número 124/04, se hace público el presente anuncio en cumplimiento de lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: 124/04-Nombre y Apellidos: «Dana, S. C.»-Domicilio: Santa Lucía, número 51 de Santander.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Ignacio Frechoso Llorente, socio de «Dana, S. C.», titular del establecimiento «El Trovador», de Santander, contra la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo de 4 de octubre de 2004, recaída en el expediente sancionador número 124/04, por infracción del horario de cierre de esta-

blecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas establecido en el Decreto 72/1997, de 7 de julio, así como el resto de documentos obrantes en el expediente, se resuelve lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La Policía Local de Santander denunció que el establecimiento «El Trovador» se encontraba abierto al público el 4 de abril de 2004, a las 3.45 horas, con veinticinco clientes en su interior.

Segundo.-Acordada la iniciación del expediente sancionador con fecha 18 de mayo de 2004, y al no haberse podido notificar a través del Servicio de Correos, se dio traslado del acuerdo y de los hechos al interesado a través del BOC número 114, de 11 de junio, además de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santander entre el 8 de junio y el 9 de julio de 2004, y se llevó a cabo su tramitación conforme establece el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Tercero.-La Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo dictó Resolución el 4 de octubre de 2004, notificada a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santander entre los días 19 de octubre y 20 de noviembre y también mediante su publicación en el BOC número 215, de 5 de noviembre, por la que acordó sancionar a «Dana, S. C.», titular del establecimiento «El Trovador», con una multa de 200 euros por la infracción leve cometida el 3 de abril de 2004.

Cuarto.-El 16 de febrero de 2005 don Ignacio Frechoso Llorente presentó un escrito en el que manifestaba haber recibido con fecha 9 de febrero de 2005 la notificación de la liquidación de la sanción que nos ocupa, así como que en ningún momento se le habían notificado los trámites pertinentes del procedimiento. Igualmente, solicitaba la vista del expediente, que tuvo lugar el 18 de febrero de 2005.

Quinto.- El 7 de marzo de 2005, don Ignacio Frechoso Llorente, en representación de «Dana, S. C.», interpuso recurso de alzada contra dicha resolución, alegando indefensión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Es competente para resolver el presente recurso de alzada el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme determina el artículo 128 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

II.- La cuestión principal es la de determinar si la Administración ha actuado correctamente a la hora de notificar al interesado los sucesivos trámites del procedimiento. Del resultado de dilucidar este extremo dependerá si la interposición del recurso ha tenido lugar en plazo o no.

III.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone:

«Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la identificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

La Administración intentó las notificaciones del acuerdo de iniciación del procedimiento y de la resolución en la calle Menéndez Pelayo número 2 de Santander, que es una dirección incorrecta. En ambos casos, el acuse de recibo hacía constar que el destinatario era desconocido. Así pues, parece que en principio la publicación en el BOC y la exposición de esos actos en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento de Santander fueron pertinentes. Sin embargo, cuando se le notifica al interesado la liquidación de la sanción, se hace en la dirección oportuna, es decir, calle Santa Lucía número 51 de Santander. Por tanto, se debe concluir que la dirección del interesado no era desconocida para la Administración, quien, si hubiera empleado una cierta diligencia, podría haber remitido las notificaciones al lugar indicado desde un primer momento.

En consecuencia, los presupuestos previstos en el artículo citado para poder acudir a la publicación del acto no se han cumplido, pues ni el destinatario era desconocido, ni se ignoraba su domicilio, ni se intentó la notificación en el lugar oportuno. Por ello hay que admitir que se le ha privado al interesado de su derecho a presentar alegaciones frente al acuerdo de iniciación y la eventual propuesta de resolución. Por esta razón, e igualmente porque el administrado no tiene por qué soportar las consecuencias de una mala práctica de la Administración, se debe considerar como dies a quo para la interposición del recurso de alzada el 18 de febrero de 2005, con lo cual se debe admitir a trámite por estar interpuesto en tiempo y forma.

Por las mismas razones expuestas, se deben retrotraer las actuaciones al momento de la notificación del acuerdo de iniciación, si bien, teniendo en cuenta que la infracción tuvo lugar el 3 de abril de 2004 y que el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, al que se debe acudir por imperativo del artículo 9 del Decreto 72/1997, de 7 de julio, dispone que las infracciones leves en la materia que nos ocupa prescriben a los tres meses de haberse cometido, y que el artículo 132.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que el plazo de prescripción de las infracciones administrativas comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido, interrumpiéndose la prescripción por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, se debe concluir que la infracción ha prescrito.

Esta Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 128 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, resuelve estimar el recurso interpuesto por don Ignacio Frechoso Llorente, titular del establecimiento «El Trovador», de Santander, contra la resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo de 4 de octubre de 2004, anulando la resolución recurrida y procediendo al archivo de las actuaciones.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo orden Jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a su notificación.»

Santander, 2 de agosto de 2005.—La secretaria General, P. A. La directora general del Servicio Jurídico. (Decreto 9/2005, de 26 de enero), Ana Sánchez Lamelas.

05/10190

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución denegando aplazamiento de pago, expediente número 2004/0223.

En expediente de aplazamiento número 2004/0223 - Inventario 60/39/04/021309-seguido por la Tesorería General de la Seguridad Social se ha dictado resolución cuyo texto íntegro es el siguiente:

«En relación con el aplazamiento de pago concedido a don José Antonio Liaño Blanco, y con base en los siguientes:

HECHOS

Primero.- Por Resolución de esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cantabria de fecha 29 de junio de 2004, se le concedió el aplazamiento de las deudas correspondientes al período marzo

de 2002 a mayo de 2004 en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por importe de 7.322,43 euros.

Segundo.- En virtud de lo establecido en el apartado quinto de la citada Resolución que indica lo siguiente:

-«Este aplazamiento quedará sin efecto ante la falta de ingreso, a su vencimiento de cualquiera de los plazos del aplazamiento y cuando el beneficiario deje de mantenerse al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con la Seguridad Social con posterioridad a la concesión del aplazamiento».

Tercero.- Según los datos obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social se ha comprobado que don José Antonio Liaño Blanco no ha efectuado los pagos de los plazos establecidos en el cuadro de amortización desde el correspondiente a marzo de 2005 inclusive y siguientes, y asimismo no ha ingresado en período voluntario todas las cuotas devengadas con posterioridad a la concesión del aplazamiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social es el órgano competente para dictar la presente resolución según lo dispuesto en la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio de 2004 (BOE 14 de agosto de 2004).

Segundo.- Artículo 20, apartados 6 y 7, de la Ley General de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley 52/2003 de 10 de diciembre, de Disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.

Artículos 32 y 36 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por RD de 11 de junio de 2004 (BOE de 25 de junio de 2004).

Disposición Transitoria Primera, apartado 3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social .

RESOLUCIÓN

Se declara sin efecto el aplazamiento concedido por Resolución de fecha 29 de junio de 2004 a don José Antonio Liaño Blanco, continuándose el procedimiento de apremio que se hubiese suspendido por la concesión del mismo, dictándose sin más trámite providencia de apremio respecto de la deuda no apremiada, con el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o no los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de ingreso. Dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se trate de recursos distintos a cuotas.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director General de esta Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social en relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 13 de julio de 2005. El Director Provincial, PD El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva y Procedimientos Especiales, Jesús Bermejo Hermoso.»

Y para que sirva de notificación a don José Antonio Liaño Blanco, cuya notificación en los domicilios de calle La Central, 2 - 4 de Cacedo de Camargo, y calle Mies del Valle 18 de Santander no se ha podido practicar por el Servicio de Correos «por desconocido», de acuerdo con lo establecido